

José Miguel LÓPEZ GARCÍA

El motín contra Esquilache

Madrid, Alianza Editorial, 2006, 260 pp.

El autor de este libro tiene ya acreditada su solidez como especialista en la historia urbana de la época moderna, especialmente en la de Madrid. Ahora ofrece una minuciosa investigación que presenta el motín madrileño de 1766 como un movimiento de protesta popular provocado por las malas condiciones de vida que padecía el pueblo de la capital. Se suma con ello a la tesis de historiadores como Georges Rudé, E. P. Thompson, Pierre Vilar y otros, que ven en el motín contra el ministro siciliano de Carlos III uno más de los muchos motines acaecidos en la Europa de finales del Antiguo Régimen: una forma de protesta urbana cuyo principal protagonista fue la multitud, quien, invocando el “precio justo” y el “bien común”, reivindicaba la rebaja del pan y de otros alimentos.

Gracias a las investigaciones del propio autor y a las de otros, la primera parte del libro ofrece un valioso análisis de las condiciones de vida del pueblo llano en aquella urbe de inmigrantes que era Madrid: una ciudad caracterizada por una elevada proporción de población adulta frente a la infantil, ya que el crecimiento demográfico desde 1714 —hasta alcanzar los 150.000 habitantes en vísperas del motín de Esquilache— fue debido, sobre todo, a una migración temporal y a otra permanente en busca de oportunidades laborales. La residencia de 6.000 funcionarios de la Monarquía, de unos 200 miembros de la alta nobleza, de 8.000 hidalgos y de casi cien instituciones con 4.600 individuos, así como de unos 600 representantes del capital mercantil, con casi la mitad incluidos en los Cinco Gremios Mayores, determinaba las características del mercado laboral. La primera actividad era el servicio doméstico; a este colectivo seguía en importancia el dedicado a la producción manufacturera, con 11.000 personas diseminadas en numerosos pequeños talleres; la construcción suministraba unos 10.000 empleos directos, en su mayoría temporales y sin sujeción a la disciplina gremial; por último, la industria alimentaria y el comercio al por menor proveían al pueblo, entre otros productos, de agua y de pan, con cerca de un millar de aguadores y otros tantos mozos de tahona.

Ahora bien, Madrid no tenía vocación industrial, como demuestran la primacía de los talleres de sastres sobre otros ramos de la actividad textil y, sobre todo, el control ejercido por los comerciantes de los Cinco Gremios Mayores sobre la importación de materias primas y de artículos suntuarios. La abundancia de esas importaciones, destinadas a las elites, hacía que más de la mitad de los maestros agremiados (3.956) no pudiera trabajar por cuenta propia, sino por encargo de comerciantes o colegas acaudalados, a veces incluso a cambio de un salario. En los talleres más ricos trabajaban cerca de 6.700 oficiales, mancebos, aprendices, maestros empobrecidos y numerosas mujeres y niños ajenos al gremio. Eran muchas, en definitiva, las ocupaciones en las que la oferta de trabajo sufría grandes fluctuaciones; de forma que resultaban numerosos los trabajadores cualificados en paro la mayor parte del año, por no hablar de los simples jornaleros (mozos de cuerda, peones de albañil o agua-

dores) o de las mujeres dedicadas a la venta ambulante o a la manufactura domiciliaria (costureras, tejedoras, hilanderas). Eran continuos los choques entre maestros y operarios por la duración de la jornada y el nivel salarial, lo que pone en evidencia el empeoramiento de las condiciones laborales y el descenso de los salarios reales con el paso del tiempo. La llegada periódica de masas de inmigrantes empobrecidos en busca de trabajo impedía cualquier mejora.

Al mismo tiempo, la desigual distribución de la riqueza afectaba también a la propiedad inmobiliaria: los inquilinos suponían el 97 por 100 de la población, la mayor parte de ellos hacinados en habitaciones pequeñas, mal ventiladas, sórdidas, sin agua ni tipo alguno de saneamientos; proporcionaban, sin embargo, más de ocho millones de reales a las escasas familias propietarias. Los propietarios privilegiados se negaban a aumentar el parque inmobiliario para que no bajasen los alquileres; de forma que el aumento sostenido de la demanda fue elevando el precio de las “viviendas”, contribuyendo a limitar la formación de familias estables y al descenso del nivel de vida de los asalariados y del conjunto del pueblo llano a mediados de siglo. López García ofrece abundante información sobre los “inquilinos” de aquel “sórdido caserío” y sobre su dieta alimenticia, información imposible de ser incluida aquí. La intención del autor es mostrar hasta qué punto había empeorado la vida del pueblo madrileño al llegar Carlos III en 1759, situación a la que contribuían el aumento de la presión fiscal y el de la represión contra el robo, el contrabando a pequeña escala, la venta ambulante y la prostitución callejera. Si a todo ello sumamos la carestía de la primera parte de la década de 1760, el poder acumulado por el ministro italiano de Carlos III —cuyo ascendiente sobre el rey era notable y que a la cartera de Hacienda añadió poco después la de Guerra—, y el nuevo incremento de los alquileres provocado por las reformas urbanas proyectadas por el mencionado Esquilache con el arquitecto Sabatini, queda servido el caldo de cultivo favorable al motín popular.

Las reformas urbanas eran más que convenientes, puesto que estaban destinadas a sanear aquella ciudad en la que, a falta de otras posibilidades, las basuras, deposiciones y otras inmundicias eran arrojadas por las ventanas. Consistían no sólo en empedrar las calles y embaldosar las aceras, sino también en construir un alcantarillado embrionario, poner canalones en los tejados de las casas, construir desagües con sumidero y fosa séptica, así como conductos que irían a parar a las alcantarillas. El problema radicaba en que, como siempre durante el Antiguo Régimen, el poder público no se hacía cargo de la financiación: los propietarios de los inmuebles debían asumir el coste en este caso; autorizándoseles a subir los alquileres un 5 por 100; pero los aumentos fueron de hecho bastante mayores. La instalación de 4.000 faroles para hacer más seguras las noches madrileñas dio lugar a nuevos tributos, agotó las velas de sebo y elevó aún más el precio del aceite de oliva en un año de mala cosecha. Al mismo tiempo, ni la subvención tradicional del pan en la Corte, ni las importaciones de trigo desde Nápoles y Sicilia, lograron impedir que en 1765 su precio fuera el doble que seis años antes, mientras la serie ininterrumpida de malas cosechas hacía subir también otros mantenimientos. La agudización de la desnutrición crónica de

las capas populares favoreció la extensión de enfermedades contagiosas, lo que hizo aumentar la mortalidad en la capital entre 1761 y 1765. A finales de ese año hubo ya varias acciones de protesta popular que no presagiaban nada bueno. Pero la gota que desbordó el vaso fue el célebre bando que ordenaba el recorte de las capas y sombreros tradicionales, publicado el 10 de marzo de 1766 con inclusión de las penas a los contraventores.

El bando provocó la conspiración de algunos miembros de las élites para derrocar a Esquilache, a quien venían ya acusando de “despotismo ministerial”: aristócratas, nobles y “colegiales mayores” descontentos por la tendencia de Carlos III a cubrir plazas políticas y burocráticas con simples hidalgos y “manteístas”, especialmente descontentos por el ascendiente del ministro siciliano; y algunos representantes y simpatizantes de la Compañía de Jesús, que había perdido el confesionario regio y sufría el rechazo de las élites políticas y sociales afines a los círculos ilustrados en auge con el nuevo monarca. Se sirvieron de la sátira política, el vehículo opositor de la época, anunciando en alguna de ellas la existencia de armas y municiones para lograr la destitución de Esquilache.

Pero no fue esa conjura la que dio lugar al motín iniciado el 23 de marzo, al comenzar la Semana Santa, mantiene el autor. Difícilmente —nos dice— podían interesarse las clases privilegiadas por dirigir un movimiento que podía dar al traste con el Estado absolutista a cuya sombra medraban. Claro que no querían eso, se puede responder: lo que querían era el poder político en ese Estado y en sus círculos burocráticos, un poder del que se estaban ya viendo desplazadas por el nuevo rey y sus tendencias ilustradas, anticolegiales y antijesuítas. Además, tampoco el pueblo quería derrocar aquella monarquía, como demostró a lo largo de los días del motín; sus reivindicaciones eran otras, sólo coincidentes con las de la conjura privilegiada en la desaparición de Esquilache. Más convincente sería el argumento de la incapacidad de los privilegiados para movilizar tales masas, como efectivamente se consiguió.

En opinión de López García, fue un movimiento popular bien organizado, dirigido y controlado por las corporaciones de oficios y cofradías que, precisamente en aquellos días, se reunían en sus respectivas sedes para preparar las veinte procesiones que habitualmente protagonizaban en el centro de la ciudad durante la semana. Las descripciones del tumulto muestran unos líderes maduros, con oficio y residencia fija; entre ellos destacan los zapateros, hombres con fama de independientes, críticos, rebeldes y con cierto nivel de alfabetización. A esos líderes se fueron sumando grupos numerosos de los arrabales. Un motín controlado también por los “capataces de los barrios”, especialmente a la hora de desarmar a la multitud una vez conseguidas sus reivindicaciones. Esos capataces, ninguno de ellos noble, eran personas de gran autoridad en sus respectivos distritos. Tras investigar minuciosamente todos los pasos del motín en el transcurso de sus tres días de duración, el autor no encuentra ningún rastro de intervención privilegiada. No parece que la hubiera, desde luego, ni siquiera en el momento cumbre de presentar el pueblo sus reivindicaciones ante la persona del mismo monarca. Ahora bien, quedan pruebas sobre la actuación de los capataces; pero la destrucción documental, llevada a cabo tras la amnistía con-

cedida a los amotinados, nos priva de testimonios sobre los organizadores gremiales, testimonios que podrían acabar de corroborar la hipótesis de esta obra, hipótesis valiosa de historia social, la más plausible y explicativa hasta ahora.

La tercera parte de la obra expone las respuestas gubernamentales al motín, todas ellas típicas del régimen absoluto pero ya con matices del reformismo ilustrado. La represión cayó directamente sobre los miembros, o posibles miembros, de la conjura de los privilegiados. No podía ser de otra manera: los hechos habían sido tan graves, que el rey y su equipo de gobierno consideraban necesario imponer un castigo ejemplar; pero el 26 de marzo el mismo monarca había concedido una amplia amnistía a los protagonistas del motín, a las masas y a sus líderes.

Concepción de Castro Monsalve
Universidad Complutense de Madrid